

¡Basta de abusos!

corrupción, fraude y un gobierno que no responde

● Mientras la corrupción avanza sin freno y el abuso de poder destruye la confianza ciudadana, Chile se sumerge en una crisis de transparencia y justicia. La indignación crece, las promesas vacías ya no engañan a nadie, y el país exige respuestas reales ante el desfalco del Estado.



La corrupción y el fraude en la administración pública chilena han sido problemas recurrentes que han minado la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales. A lo largo de los años, diversos escándalos han salido a la luz, demostrando la fragilidad de los mecanismos de supervisión y control del Estado. El actual gobierno no ha estado exento de polémicas, con casos que han generado indignación y un fuerte cuestionamiento a la transparencia y probidad en la gestión pública.

Desde el Caso ProCultura hasta el robo de computadores en dependencias estatales, pasando por el uso fraudulento de licencias

médicas y los pagos excesivos de horas extras, los episodios de corrupción han sido numerosos y alarmantes. Cada uno de estos escándalos ha puesto en evidencia la falta de regulación efectiva y la necesidad de reformas estructurales que garanticen el buen uso de los recursos públicos. La ciudadanía, cansada de discursos vacíos, exige medidas concretas y responsabilidades claras.

En Magallanes, el descontento se ha intensificado. La población ha sido testigo de irregularidades que afectan su calidad de vida y el uso de los fondos estatales. Autoridades locales han expresado su preocupación y han exigido sanciones

ejemplares para aquellos implicados en actos de corrupción. La indignación es palpable, con ciudadanos exigiendo transparencia y una rendición de cuentas efectiva por parte del gobierno.

El Caso ProCultura ha sido uno de los más impactantes, al revelar el presunto desvío de recursos públicos hacia campañas políticas. La falta de fiscalización en la gestión de fondos estatales ha permitido que estos hechos ocurran sin consecuencias inmediatas. Este escándalo, junto a otros, ha reforzado la percepción de que las instituciones públicas no están cumpliendo su deber de garantizar el correcto uso de los recursos destinados al bienestar social.

El robo de computadores en oficinas estatales ha desatado especulaciones sobre el posible ocultamiento de información clave en investigaciones de corrupción. La coincidencia de este hecho con indagaciones en curso ha generado desconfianza en la ciudadanía, que sospecha de una estrategia deliberada para evitar que ciertos datos salgan a la luz. La oposición ha exigido respuestas claras y mayores medidas de seguridad para el manejo de información gubernamental.

El abuso sistemático de licencias médicas por parte de funcionarios públicos ha sido otro motivo de indignación. Miles de empleados han salido del país mientras se encon-

traban bajo licencia, lo que representa un fraude al Estado y un abuso de los beneficios otorgados por el sistema público. En Magallanes, la situación es particularmente grave, con un alto número de registros de viajes al extranjero en medio de licencias médicas, lo que ha generado llamados a sanciones ejemplares y reformas urgentes.

Los pagos excesivos de horas extras a empleados públicos han sido objeto de críticas por su posible vínculo con el favoritismo político. Se han detectado casos en los que funcionarios han recibido sumas millonarias en un contexto de baja eficiencia gubernamental, profundizando la desconfianza en la administración ac-

tual. La ciudadanía exige una revisión exhaustiva de estos pagos y una regulación más estricta para evitar el mal uso de los fondos estatales.

Ante esta serie de escándalos, la pregunta es inevitable: ¿será capaz el Gobierno de recuperar la confianza perdida? La administración pública enfrenta un desafío crucial en su esfuerzo por restablecer la transparencia y la probidad. La presión ciudadana y las demandas políticas exigen acciones decisivas, con reformas profundas que impidan que estos hechos vuelvan a ocurrir. Solo el tiempo y la efectividad de las medidas adoptadas determinarán si Chile puede avanzar hacia una gestión más ética y confiable.

CORRUPCIÓN EN FUNDACIONES: EL CASO PROCULTURA

Uno de los escándalos más impactantes ha sido el Caso ProCultura, una fundación investigada por el presunto desvío de recursos públicos hacia campañas políticas. La Fiscalía ha revelado que parte de los fondos destinados a proyectos sociales habrían sido utilizados de manera irregular, generando una ola de críticas y llamados a endurecer la fiscalización de estos convenios.

En Magallanes, la fundación recibió

\$52.800.000 para la implementación del programa Pequeñas Localidades en Porvenir, además de \$23.690.000 para la restauración y conservación de un mural. Sin embargo, la ejecución de este último proyecto fue realizada en su totalidad por una empresa privada, cuyo dueño figuraba también como trabajador de ProCultura, lo que ha levantado sospechas sobre posibles conflictos de interés y manejo irregular de recursos.

ROBO DE COMPUTADORES EN DEPENDENCIAS ESTATALES: ¿ENCUBRIMIENTO DE INFORMACIÓN?

TALES: ¿ENCUBRIMIENTO DE INFORMACIÓN?

El robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha generado fuertes sospechas, particularmente por su coincidencia con investigaciones de corrupción en curso. En julio de 2023, delincuentes sustrajeron 23 computadores y una caja fuerte con documentos clave, lo que ha desatado especulaciones sobre un posible intento de ocultar información relevante para las indagaciones judiciales.

Este hecho ha despertado preocupación en la

oposición, que exige claridad sobre el destino de los dispositivos y los documentos desaparecidos, así como mayores medidas de seguridad en el manejo de información gubernamental.

EL CASO MONSALVE: DE PRISIÓN PREVENTIVA A ARRESTO DOMICILIARIO

El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha estado en el centro de la polémica tras ser acusado de delitos graves. La Corte Suprema resolvió cambiar su medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario total, decisión que ha provocado indignación en la oposición, cuyos representantes han acusado al gobierno de encubrimiento y manejo político de la justicia.

FRAUDE EN LICENCIAS MÉDICAS: UN ESQUEMA DE ABUSO SISTEMÁTICO

Un informe de la Contraloría General de la República reveló que más de 25.000 funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia médica, lo que ha sido calificado

como un fraude al fisco. En Magallanes, la situación es particularmente grave, ya que la región ocupa el tercer lugar a nivel nacional en funcionarios que viajaron al extranjero durante sus licencias médicas, con 5.980 registros de entradas y salidas.

Las corporaciones municipales de Puerto Natales y Punta Arenas están entre las entidades con más licencias médicas potencialmente irregulares, con 392 y 369 casos respectivamente. Parlamentarios han exigido sanciones ejemplares, mientras que el Colegio Médico de Magallanes anunció que enviará a los médicos involucrados a su tribunal de ética.

La UDI ha solicitado la renuncia inmediata de todos los funcionarios públicos que hicieron mal uso de licencias médicas para salir del país, exigiendo además una auditoría profunda por parte del Ministerio de Salud y la reactivación de un proyecto legislativo para prevenir la emisión de licencias médicas falsas.

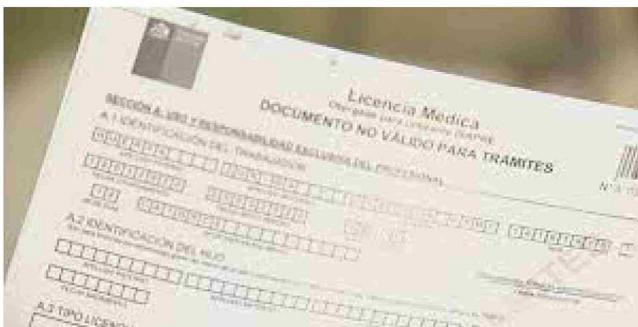
PAGOS EXCESIVOS DE HORAS EXTRAS: UN NUEVO ESCÁNDALO FINANCIERO

Otro escándalo que ha generado indignación es el pago excesivo de horas extras a funcionarios públicos. Se han detectado casos en los que empleados han recibido hasta \$11 millones anuales solo por este concepto, superando los límites legales establecidos.

Ante esta situación, parlamentarios han exigido una revisión profunda de estos pagos y mayor control en la administración de los recursos fiscales. La percepción ciudadana es clara: estos pagos podrían estar vinculados al favoritismo político, lo que profundiza la desconfianza en la gestión del actual gobierno.

CORRUPCIÓN EN MAGALLANES: IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE VACUNAS

Una auditoría de la Contraloría reveló graves irregularidades en el manejo de las vacunas contra el Covid-19 en Magallanes. Se detectaron 48.998 dosis desaparecidas y 297 inyecciones con vacunas vencidas, algunas administradas con hasta 903 días de diferencia entre la fecha de vencimiento y la de aplicación.



MÁS DE 25 MIL FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE PRESENTARON LICENCIAS MÉDICAS VIAJARON AL EXTRANJERO.

La Seremi de Salud de Magallanes ha atribuido estos hechos a errores de registro, pero la Contraloría exige una investigación exhaustiva para esclarecer el destino de las dosis no contabilizadas.

¿SERÁ CAPAZ EL GOBIERNO DE RECUPERAR LA CONFIANZA PERDIDA?

La ciudadanía está cansada, exige respuestas y medidas concretas para evitar que estos hechos sigan ocurriendo. La pregunta es inevitable: ¿será capaz el gobierno de restaurar la confianza perdida? El tiempo y las acciones que se tomen serán determinantes para el futuro institucional y la transparencia en Chile.

Pinguino Multimedia le consultó a los ciudadanos su opinión respecto de estos hechos, los cuales fueron críticos.

Joaquín Gutiérrez, dijo: "Las promesas de cambio de este gobierno se han quedado en discursos vacíos y poca acción".

Por su parte, Lidia Muñoz, añadió que "los conflictos internos del gobierno han hecho imposible avanzar en reformas reales, las reformas que nos prometieron y por las

que nosotros votamos, ya fue, no existían, simplemente nos engañaron".

En tanto, Marcela Canales, dijo que "la falta de liderazgo ha dejado a la ciudadanía sin respuestas ni soluciones concretas, simplemente se han dedicado a robar".

Luis Nuñez se expresó indignado y agregó que "este gobierno simplemente nos hundió, cada día parece más improvisado que el anterior".

Finalmente, Jorge Mendoza, agregó que "el gobierno parece más preocupado por la imagen que por la efectividad de sus políticas, aunque ya no funcionarán y nuestro país cada día esta peor, cada día se sabe de un nuevo fraude, esto no puede seguir así".

REACCIONES AUTORIDADES DE MAGALLANES

Ante el caso de licencias, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, se refirió a los funcionarios municipales y de la Cormupa, que se han visto involucrados, indicando que "se ha decretado un sumario para ellos, con un fiscal de dedicación exclusiva, con el fin de investigar lo antes

posible qué es lo que ha ocurrido. Aquí hay varias responsabilidades: primero, la administrativa, que se aborda a través de los sumarios; y segundo, en caso de que tanto en la corporación como en la municipalidad se comprueben situaciones de perjuicio económico —considerando que parte de los fondos de la corporación provienen del municipio—, por supuesto que tomaremos acciones de cobro. Además, en estos casos pueden surgir acciones penales, las cuales también emprenderemos con el mismo criterio".

El diputado Christian Matheson, expresó su indignación con los distintos hechos que han ocurrido en este gobierno, manifestando que "es lamentable que quienes decían venir a mejorar la política y tener una calidad moral superior a todos sus antecesores, cada semana nos den muestra de un nuevo hecho de corrupción. Habrán casos en que corresponda el pago de horas extraordinarias, pero si hacemos un paralelo entre eficiencia del gobierno y el exceso de horas extras que se han pagado, es muy difícil que se puedan justificar. Esto más parece un



UNO DE LOS ESCÁNDALOS MÁS IMPACTANTES FUE EL CASO MONSALVE, EN DONDE EL GOBIERNO NO RESGUARDÓ A LA VÍCTIMA.

pago de favores políticos, pasando a llevar la normativa vigente, cosa a lo que se ha acostumbrado el actual gobierno".

Por su parte, la diputada Javiera Morales, añadió que "estos últimos días hemos conocido dos noticias bastante complejas para quienes creemos que el Estado tiene un rol indiscutible en la prestación de servicios públicos. ¿Cómo es posible que 25.000 funcionarios con

licencia médica en todo Chile hayan salido del país mientras debían estar recuperándose? Personas a las que se les paga su sueldo, no como en el sector privado, y que además deben ser reemplazadas para poder prestar servicios de salud, educación y seguridad", denunció. En relación con el pago excesivo de horas extraordinarias, Morales anunció medidas inmediatas para esclarecer la situación.

"He solicitado como parlamentaria por la Región de Magallanes, dado que nuestra zona está dentro de las regiones con mayor mal uso de estos beneficios, una sesión especial en la Cámara de Diputados y Diputadas. En ella se deberá detallar cómo se va a sancionar y reintegrar estos fondos públicos y qué medidas se van a adoptar hacia el futuro para evitar que esto vuelva a ocurrir", concluyó.